



# Asamblea General

Distr. general  
30 de septiembre de 2021  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 91<sup>er</sup> período de sesiones, 6 a 10 de septiembre de 2021

#### Opinión núm. 24/2021, relativa a Steven Donziger (Estados Unidos de América)\*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo<sup>1</sup>, el Grupo de Trabajo transmitió el 3 de febrero de 2021 al Gobierno de los Estados Unidos de América una comunicación relativa a Steven Donziger. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
  - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
  - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
  - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
  - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

\* De conformidad con el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, Miriam Estrada-Castillo no participó en el examen del presente caso.

<sup>1</sup> A/HRC/36/38.



e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

##### a) Contexto

4. Steven Donziger es un ciudadano estadounidense nacido en 1961. Es abogado y reside habitualmente en la ciudad de Nueva York. El Sr. Donziger se encuentra bajo arresto domiciliario preventivo desde el 6 de agosto de 2019, acusado de desacato.

5. Según la información recibida, en febrero de 2011, un tribunal del Ecuador declaró a Chevron Corporation culpable de haber causado graves daños al medio ambiente y la salud en la selva amazónica y contra las comunidades que vivían en esa región entre 1964 y 1992. Entre otras conclusiones, el tribunal determinó que Chevron Corporation, para ahorrar costos, había vertido deliberadamente miles de millones de galones de residuos petrolíferos durante decenios en tierras ancestrales indígenas.

6. Según se informa, se impuso a Chevron Corporation una sanción de 19.000 millones de dólares en concepto de reparación de daños, cifra que, tras recurrirse el dictamen, quedó reducida a 9.400 millones. El fallo contra la empresa ha sido confirmado en cuanto al fondo, en sentencia firme, por el Tribunal Supremo del Ecuador y el Tribunal Supremo del Canadá.

7. La fuente afirma que, para evitar el pago de los daños, Chevron Corporation trasladó sus activos fuera del país durante el juicio, lo que llevó a los demandantes a incoar procedimientos de ejecución en otros países. Al parecer, los gestores de la empresa amenazaron a los demandantes con “una vida de pleitos” a menos que estos renunciasen a seguir adelante con la causa y prometieron que Chevron Corporation “lucharía hasta que el infierno se congelara y luego continuaría haciéndolo sobre el hielo”.

8. Se informa de que, días antes de la decisión del tribunal ecuatoriano de febrero de 2011, Chevron Corporation presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, al amparo de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Delincuencia Organizada, contra todos los demandantes incluidos en la demanda presentada en el Ecuador, todos sus abogados (incluido el Sr. Donziger), la principal organización no gubernamental que representaba a las comunidades y varios expertos. La empresa los acusó de haber ganado el caso utilizando medios fraudulentos y corruptos.

9. Se alega que Chevron Corporation utilizó procedimientos administrativos disponibles en los tribunales federales de los Estados Unidos para remitir la denuncia por extorsión organizada a un juez que había conocido de casos similares de exhibición de documentos. Según la fuente, durante el proceso, el juez K no “disimuló su menosprecio” por el Sr. Donziger y sugirió desde el estrado que el caso contra Chevron Corporation no era “más que una burda estafa”. El juez K también dio a entender a los abogados de la empresa que apoyaría una denuncia por extorsión organizada contra el Sr. Donziger, si decidían interponerla.

10. Según la fuente, Chevron Corporation reclamó inicialmente al Sr. Donziger unos 60.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Habida cuenta de la magnitud de las pretensiones de la parte demandante, se estableció que el Sr. Donziger tenía derecho a un juicio con jurado. Sin embargo, dos semanas antes del inicio de la fase oral, la empresa retiró los cargos por daños y perjuicios fiscales, con lo cual dejó de existir base legal para la presencia de un jurado, y la determinación de los hechos quedó exclusivamente a discreción del juez K.

11. Se informa de que, durante el juicio, el juez K negó a los acusados la oportunidad de presentar pruebas científicas de las supuestas actividades contaminantes y corruptas de Chevron Corporation en el Ecuador, incluidos los resultados de los análisis practicados en

64.000 muestras químicas. También se negó a examinar o considerar las pruebas utilizadas por los tribunales del Ecuador para dictar sentencia. Sin embargo, permitió a Chevron Corporation presentar testigos “secretos” y anónimos que no pudieron ser contrainterrogados eficazmente debido a supuestas amenazas para la seguridad. Además, el juez K permitió a la empresa presentar un testigo que reconoció que esta le pagaba un “estipendio” mensual 20 veces superior a su antiguo salario.

12. En 2014, el juez K dictaminó que el Sr. Donziger había cometido actos o participado en actos que podían considerarse “extorsión organizada”, incluidas medidas “extorsivas” para presionar a Chevron Corporation, como el apoyo de personalidades, el cabildeo gubernamental, una campaña de desinversión y una estrategia mediática impulsada por organizaciones no gubernamentales. El juez K ordenó suspender la ejecución en los Estados Unidos de la sentencia emitida por la judicatura ecuatoriana y resolvió que se retuviese cualquier “beneficio económico” derivado de la ejecución de la sentencia que el Sr. Donziger pudiera obtener a título personal por los servicios prestados como abogado. También ordenó que transfiriera a la empresa todos los bienes, presentes y futuros, que hubiera obtenido o pudiese obtener gracias a la sentencia pronunciada por la judicatura ecuatoriana.

13. Según la información recibida, en 2018, poco después de lograrse un éxito en el procedimiento de ejecución de la sentencia en el Canadá, que incluyó una decisión del Tribunal Supremo de ese país favorable a los clientes del Sr. Donziger, Chevron Corporation inició un proceso de exhibición de documentos posterior a la sentencia y presentó una demanda por desacato contra el Sr. Donziger ante el juez K. El proceso por desacato se basó en la alegación de que los fondos que el Sr. Donziger había recaudado de donantes e inversores externos para apoyar el procedimiento de ejecución, y que se habían abonado a los abogados en concepto de gastos y costas legales, debían considerarse “beneficios” derivados de la ejecución de la sentencia, incluso antes de producirse el cobro. Chevron Corporation también utilizó el proceso de exhibición de documentos para exigir información confidencial que permitiera identificar todos los activos del Sr. Donziger y de su cónyuge, con el fin de determinar si este había cumplido la condena en costas —por valor de 800.000 dólares de los Estados Unidos— dictada después del juicio por extorsión organizada, respecto de la cual se ha presentado un recurso (pendiente de resolución). El juez exigió al Sr. Donziger que entregara todos sus dispositivos electrónicos y las contraseñas de todas sus cuentas en línea a un perito forense, para que en último término Chevron Corporation pudiera examinarlos.

14. El Sr. Donziger remitió una carta al juez K explicando que no podría cumplir las órdenes, dado que hacerlo daría a Chevron Corporation acceso a documentos confidenciales, privilegiados y protegidos, y solicitó el permiso del tribunal para entrar en desacato voluntario, con el fin de poder presentar un recurso. Explicó que sus obligaciones éticas para con sus clientes le impedían entregar los dispositivos, dado que la orden parecía contravenir múltiples protecciones jurídicas en virtud del derecho estadounidense e internacional y pondría la vida de sus clientes en peligro. El Sr. Donziger también aseguró en repetidas ocasiones al tribunal que cumpliría plenamente con todas las solicitudes de exhibición de documentos en caso de no obtener su impugnación a través del recurso.

15. El 23 de mayo de 2019, el juez K supuestamente declaró al Sr. Donziger en desacato por su negativa a cumplir con el protocolo y por otros actos varios de incumplimiento, entre ellos el no haber transferido con suficiente rapidez sus derechos, títulos e intereses relativos a los honorarios del caso juzgado en el Ecuador (que supuestamente sí transfirió) y por no transferir a Chevron Corporation los fondos aportados por los inversores externos que habían estado financiando el proceso para las comunidades afectadas.

16. Al parecer, el Sr. Donziger ejerció su derecho a recurrir esa decisión declarándose voluntariamente en desacato civil, en lugar de entregar sus dispositivos y cuentas a los peritos forenses. En ese punto, el juez K propuso la presentación de cargos penales por desacato contra el Sr. Donziger. Remitió el caso a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que se negó a actuar como acusación. El juez K tomó la decisión, supuestamente inusual y extraordinaria, de designar a un bufete de abogados privado —que posteriormente admitió un conflicto de intereses dado que Chevron Corporation había sido cliente del bufete en 2018— para que ejerciese de acusación contra el Sr. Donziger en el proceso penal por desacato.

17. La fuente afirma que el juez K también seleccionó a un juez de distrito superior, el juez P, para presidir la causa penal, presuntamente incumpliendo el artículo 16 del Código de Reparto de Asuntos entre los Jueces de Distrito, correspondientes al Distrito Sur, del Reglamento Local de los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos para los Distritos Sur y Este de Nueva York, que establece que “el comité de asignación transferirá el caso por sorteo”.

b) Privación de libertad

18. Se informa que, el 6 de agosto de 2019, el juez P ordenó que el Sr. Donziger entregara su pasaporte, llevara en el tobillo un dispositivo de localización por GPS y permaneciera recluido en su domicilio. Justificó el arresto domiciliario preventivo alegando que el Sr. Donziger presentaba riesgo de fuga, concretamente porque había desobedecido anteriormente “órdenes judiciales” (no especificadas) y tenía antecedentes de viajes al Ecuador.

19. Desde septiembre de 2019 hasta enero de 2020, el Sr. Donziger solicitó repetidamente la reconsideración de dicha decisión, argumentando que, entre otras cosas: a) su recurso contra la orden judicial era transparente y obedecía a una estrategia de impugnación legítima; b) había cumplido cientos de órdenes judiciales a lo largo del proceso por extorsión organizada, incluida la orden sin precedentes de que se sometiera a un total de 19 días de declaraciones bajo juramento previas al juicio; c) sus viajes al Ecuador eran una parte esencial de su trabajo en el ámbito de los derechos humanos y de la labor de representación de sus clientes; d) había regresado voluntariamente de un viaje internacional para defenderse de los cargos de desacato; y e) resultaba inverosímil suponer que para evitar los cargos por un delito menor abandonaría a su mujer, a su hijo pequeño y su vida en los Estados Unidos, cometiendo al fugarse un delito grave, pudiendo ser acusado de evasión de la justicia y viéndose obligado a vivir como prófugo internacional. En diciembre de 2019, el tribunal rechazó reconsiderar los parámetros de la privación de libertad del Sr. Donziger. Este presentó y argumentó un recurso contra las medidas preventivas de privación de libertad, que fue desestimado en un auto de una sola frase el 18 de febrero de 2020.

20. En la fecha de presentación de la comunicación de la fuente, el Sr. Donziger llevaba recluido en su domicilio más de 500 días, a pesar de que la condena más larga contemplada para ese tipo de delito es de seis meses de prisión y de que, en la práctica, la condena de mayor duración impuesta por cargos similares ha sido de tres meses de arresto domiciliario. Se informó de que el 18 de mayo de 2020 el juez P denegó la solicitud del Sr. Donziger de un juicio con jurado, sobre la base de que la pena potencial no superaba los seis meses de prisión o los 5.000 dólares de multa.

21. Según la fuente, el juicio se ha pospuesto repetidamente por cuestiones de salud y seguridad relacionadas con la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

c) Análisis jurídico

22. La fuente aduce que se vulneraron normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial. A ese respecto, la fuente sostiene que el concepto de “reclusión” abarca todas las formas de privación de libertad, incluido el arresto domiciliario, cuando se lleva a cabo en locales cerrados de los que no se puede salir. Presuntamente, el Sr. Donziger lleva más de dos años bajo arresto domiciliario preventivo, sin poder salir de su apartamento. Además, una detención o reclusión autorizados por el derecho nacional pueden considerarse arbitrarias si se dan determinados elementos injustos o no razonables, si no son necesarios, o si no se respetan los criterios de proporcionalidad y previsibilidad o las garantías procesales.

i. Aparente falta de imparcialidad del juez en el juicio por extorsión organizada

23. La fuente subraya que, para garantizar el derecho a un juicio imparcial y, por lo tanto, no incurrir en reclusión arbitraria, la independencia e imparcialidad de los tribunales resulta esencial. La obligación de imparcialidad exige que cada uno de los responsables de la toma de decisiones sea imparcial y sea percibido como tal. Son fundamentales tanto la imparcialidad real como la apariencia de imparcialidad.

24. La fuente recuerda que los jueces no deben permitir que su discernimiento se vea influenciado por prejuicios o sesgos personales. La fuente también recuerda que el Comité de Derechos Humanos estableció, en la comunicación *Karttunen c. Finlandia*<sup>2</sup>, que la “imparcialidad” del tribunal supone que los jueces no deben tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto de que entienden y que no deben actuar de manera que promuevan los intereses de una de las partes. La actuación de los jueces debe considerarse imparcial por un observador razonable. Los jueces no solo deben ser imparciales, sino que también deben ser percibidos de esa manera.

25. La fuente afirma que ha suscitado preocupación la percepción de parcialidad del juez K, quien hizo pública su opinión sobre el Sr. Donziger antes de que se presentara la denuncia por extorsión organizada. En septiembre de 2010, al parecer el juez K declaró que el Sr. Donziger estaba “tratando de hacer ruido para arreglar el déficit de la balanza de pagos. Enseguida lo entendí [...]. El objetivo de esta farsa, para Donziger, es hacer que esta situación sea tan incómoda y desagradable para Chevron que termine pagando para acabar con el asunto [...] convencerle de que pague” y preguntó: “¿las expresiones Ley Hobbs, extorsión [y] RICO le dicen algo?”<sup>3</sup>. Cuatro meses después, Chevron Corporation presentaba una denuncia por extorsión organizada.

26. Además, el juez K también habría hecho comentarios sobre los aldeanos del Ecuador que demandaron a Chevron Corporation, refiriéndose a ellos como los “supuestos demandantes” y calificando el trabajo del Sr. Donziger en el Ecuador como “un proceso en el que no se observó el principio de buena fe”. Por el contrario, el juez K se refirió a la compañía como una “empresa de considerable importancia para nuestra economía que da empleo a miles de personas en todo el mundo y suministra una serie de productos básicos, gasolina, gasóleo para calefacción y otros combustibles y lubricantes de los que cada uno de nosotros depende en el día a día”, y afirmó: “no creo que haya nadie en esta sala que quiera llegar con su coche a una gasolinera para repostar y encontrarse con que no hay gasolina porque esta gente [los ecuatorianos] la ha retenido en Singapur o en cualquier otro lugar”.

27. Supuestamente, las dudas por la percibida parcialidad del juez K no le impidieron asignar el caso planteado al amparo de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Delincuencia Organizada a su propio tribunal en 2011, en lugar de dejar que se hiciese por sorteo.

28. La fuente añade que, durante el juicio, el juez K negó a los encausados la oportunidad de presentar pruebas científicas de la contaminación de Chevron Corporation y rechazó examinar o considerar las pruebas, incluidos 105 informes técnicos probatorios, en los que se habían basado los tribunales del Ecuador para emitir su veredicto contra la empresa. Incluso después de que un testigo presentado por la compañía admitiera haber obtenido grandes sumas de dinero y otros beneficios de aquella antes de declarar ante el tribunal contra el Sr. Donziger, el juez K concluyó que el testigo decía la verdad sobre los hechos esenciales del caso.

ii. Aparente falta de imparcialidad del poder judicial durante el proceso penal por desacato

29. Al parecer, en respuesta a la decisión emitida en el juicio por extorsión organizada, y mientras el Sr. Donziger y otras partes estaban avanzando en la ejecución de la sentencia del tribunal del Ecuador en otras jurisdicciones, Chevron Corporation solicitó la exhibición de documentos después de que se dictara la sentencia para identificar todos los activos del Sr. Donziger y determinar si este había cumplido la condena en costas —por valor de 800.000 dólares— impuesta en el juicio sin jurado. Después de que el Sr. Donziger recurriera la orden de entregar sus dispositivos y cuentas a los peritos forenses, el juez K presentó por la vía penal cargos extraordinarios por desacato, mientras el recurso estaba pendiente de resolución.

30. Según la fuente, en virtud del artículo 42 del Código Federal de Enjuiciamiento Penal de los Estados Unidos, el tribunal debe solicitar a la Fiscalía que actúe como acusación en la

<sup>2</sup> Comité de Derechos Humanos, *Karttunen c. Finlandia*, comunicación núm. 387/1989, párr. 7.2.

<sup>3</sup> Véase <https://ia803409.us.archive.org/7/items/gov.uscourts.nysd.520592/gov.uscourts.nysd.520592.60.0.pdf>. Véase también [https://www.huffpost.com/entry/will-the-supreme-court-strike-down-chevrons-facially\\_b\\_591b155de4b03e1c81b00903](https://www.huffpost.com/entry/will-the-supreme-court-strike-down-chevrons-facially_b_591b155de4b03e1c81b00903).

causa por desacato. El caso contra el Sr. Donziger fue remitido a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que se negó a actuar como acusación. La respuesta del juez K fue tomar la decisión, supuestamente inusual, de designar a un bufete de abogados privado —que posteriormente admitió un conflicto de intereses dado que Chevron Corporation había sido cliente del bufete en 2018— para que este ejerciese de acusación particular en el proceso penal por desacato.

31. La fuente informa de que el juez K también seleccionó personalmente al juez P para presidir la causa penal, lo que según la fuente supone un incumplimiento del artículo 16 del Código de Reparto de Asuntos entre los Jueces de Distrito, que establece que “el comité de asignación transferirá el caso por sorteo”.

32. Desde la presentación de esos cargos, el Sr. Donziger habría formulado varias peticiones previas al juicio en las que planteaba dudas sobre la imparcialidad del juez P. Todas ellas fueron rechazadas por el propio juez y no fueron remitidas a otro. Las peticiones fueron denegadas por varios motivos, entre ellos que la parcialidad no era una razón para asignar el caso a otro tribunal.

33. El 13 de julio de 2020, dos jueces federales de los Estados Unidos retirados tomaron la inusual iniciativa de criticar públicamente a los jueces federales en activo que entendían en el proceso penal por desacato contra el Sr. Donziger y escribieron que estaban “profundamente preocupados” por el “grave riesgo” que corría el respeto de las garantías procesales<sup>4</sup>. Se informó de que un experto en ética jurídica había presentado una declaración jurada en la que afirmaba que el bufete de abogados del que se designaron los abogados que ejercían de acusación particular presentaba “un conflicto de intereses que constituía un motivo de descalificación, debido a sus vínculos indirectos con empresas relacionadas con Chevron”, lo que indicaba que “la legitimidad del proceso, a tenor del artículo 42 y, en última instancia, del sistema de justicia penal, podía verse menoscabada”. Un destacado abogado litigante de los Estados Unidos, profesor emérito de Derecho en la Universidad de Duke, también planteó sus dudas públicamente después de que el juez que presidía el tribunal intentara forzar el inicio de la fase de juicio del proceso penal durante la pandemia de COVID-19, cuando los testigos y los abogados no podían comparecer en persona. Al parecer, señaló que “el ejercicio de la discreción de imponer una condena penal por desacato, sin la supervisión de un jurado y durante una crisis sanitaria, está fuera de lugar”, y añadió: “nada de esto transmite una imagen de imparcialidad en los juicios y observancia de las garantías constitucionales”<sup>5</sup>.

34. Para la fuente, habida cuenta del conflicto de intereses y la parcialidad del juez K contra el Sr. Donziger, es preocupante que este decidiese mantener los cargos penales por desacato contra él, designando a una acusación particular con vínculos con Chevron Corporation y seleccionando personalmente a un juez para presidir el proceso. El Comité de Derechos Humanos ha explicado que un juicio no es imparcial si, por ejemplo, el acusado en un proceso penal enfrenta la expresión de una actitud hostil de parte del público o el apoyo de una parte en la sala del tribunal que es tolerada por el tribunal, con lo que se viola el derecho a la defensa o el acusado queda expuesto a otras manifestaciones de hostilidad con efectos similares<sup>6</sup>. En el presente caso, la expresión de una actitud hostil proviene supuestamente del juez, cuya función es presidir el proceso de forma justa e imparcial.

35. Basándose en las alegaciones expuestas, la fuente afirma que las declaraciones y acciones del juez K plantean serias dudas sobre su imparcialidad, lo que en sí mismo puede equivaler a una forma de represalia contra el trabajo del Sr. Donziger en el ámbito de los derechos humanos. El derecho a un tribunal imparcial exige que los jueces no estén afectados por ningún interés en el caso concreto o sean parte en él, que no tengan opiniones preformadas

<sup>4</sup> Véase <https://static1.squarespace.com/static/5ac2615b8f5130fda4340fcb/t/5f0dc3fd6a8632767c2de633/1594737663061/2020-07-13-law360-gertner-bennett.pdf>.

<sup>5</sup> Véase [https://uploads-ssl.webflow.com/5dfadfd73722094f43ca18cf/5f52ebb8aa1af539b6558418\\_MT.pdf](https://uploads-ssl.webflow.com/5dfadfd73722094f43ca18cf/5f52ebb8aa1af539b6558418_MT.pdf).

<sup>6</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 25.

sobre el mismo y que no actúen de forma que promuevan los intereses de una de las partes. Se alega que no se ha respetado el principio de imparcialidad del tribunal.

iii. Limitación de la libertad del Sr. Donziger con el supuesto objetivo de eludir la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente

36. El derecho a la igualdad ante los tribunales exige que los casos similares se traten de manera parecida. Para respetar ese derecho, se prohíbe la creación de procedimientos excepcionales o de tribunales especiales para determinadas categorías de delitos o grupos de personas, a menos que existan justificaciones objetivas y razonables. Además, la decisión de imponer una privación de libertad ha de tomarse con arreglo al derecho y los procedimientos aplicables y ser proporcionada respecto de la finalidad que se persigue, razonable y necesaria.

37. La fuente informa de que antiguos jueces han expresado su preocupación por la presentación de cargos excesivos contra el Sr. Donziger. En un artículo publicado el 13 de julio de 2020<sup>7</sup>, estos afirmaron que “nunca habían oído hablar de la presentación de cargos penales en circunstancias en las que el abogado, actuando aparentemente de buena fe, más que desacatar abiertamente al tribunal manifiesta su deseo de presentar un recurso”. Según los jueces, la presentación de un recurso por parte del Sr. Donziger obedecía a la necesidad de “resolver adecuadamente las relevantes cuestiones constitucionales planteadas, dados los peligros a los que se enfrentan sus clientes en el Ecuador”. Además, argumentaron que “para proteger tanto la potestad de los tribunales de condenar a alguien por desacato como el propósito de dicha sanción penal, este delito debe reservarse para actos tan graves y reprobables que constituyan [no solo una ofensa contra] el juez que preside, sino que puedan además socavar la confianza de la ciudadanía en la autoridad y dignidad de nuestros tribunales”. En particular, los juristas cuestionaron la necesidad y la proporcionalidad del uso de la figura penal del desacato en el presente caso, al considerar que el desacato civil constituía un instrumento suficiente para abordar la situación.

38. La fuente argumenta que la legislación internacional sobre derechos humanos protege el derecho a la intimidad y prohíbe la injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia de una persona. En el asunto *Michaud c. Francia*, en el que se interceptaron las comunicaciones entre un abogado y su cliente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció que no puede haber injerencias en el derecho a la privacidad a menos que sean conformes a la ley, persigan uno o varios objetivos legítimos y sean necesarias en una sociedad democrática. Dichas restricciones deben responder a una necesidad social apremiante y han de ser proporcionales al objetivo legítimo que se persigue.

39. Según la fuente, en virtud del derecho internacional los abogados tienen el deber profesional de proteger la privacidad y la confidencialidad de sus comunicaciones con los clientes. En los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados se establece que los abogados tienen el deber y la responsabilidad de preservar el honor y la dignidad de su profesión siendo leales y respetuosos con los intereses de sus clientes. Según el principio 12, los abogados en todo momento actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión. Es importante destacar que en los Principios también se dispone que los Gobiernos protegerán a los abogados de persecuciones o sanciones a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión y que reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional.

40. En el asunto *Michaud c. Francia*, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el artículo 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales amparaba la confidencialidad de las comunicaciones privadas, cualquiera que fuera el contenido de la correspondencia en cuestión y cualquiera que fuera su forma. El Tribunal afirmó que el artículo 8 confería una protección reforzada a la comunicación entre los abogados y sus clientes, justificada por el hecho de que a los abogados se les asigna un papel fundamental en una sociedad democrática, el de defender a los

<sup>7</sup> Véase <https://static1.squarespace.com/static/5ac2615b8f5130fda4340fcb/t/5f0dc3fd6a8632767c2de633/1594737663061/2020-07-13-law360-gertner-bennett.pdf>.

litigantes, y aquellos no pueden llevar a cabo esa tarea esencial sin garantizar a sus defendidos que las comunicaciones entre ambas partes serán confidenciales.

41. En el asunto *Leotsakos c. Grecia*, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que la incautación de varios objetos y documentos en el marco de una investigación penal contra un abogado se había realizado sin respetar suficientemente la protección del privilegio abogado-cliente. En el asunto *Wolland c. Noruega*, el Tribunal dictaminó que, para que una injerencia sea legítima en virtud del artículo 8 del Convenio, deben existir garantías suficientes y adecuadas para evitar la arbitrariedad. El Tribunal reconoció que era posible que la legislación nacional permitiera el registro de los documentos de los abogados siempre que se establecieran las debidas salvaguardias, como la presencia de un representante de un colegio de abogados.

42. Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que la divulgación de las comunicaciones entre un abogado y su cliente constituye una vulneración del derecho a la privacidad. En el caso *Donoso vs. Panamá*, la Corte analizó si la escucha y grabación de una conversación telefónica entre un abogado y el padre de su cliente, y la posterior divulgación de su contenido, vulneraban el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte tuvo en cuenta el carácter privado de la conversación telefónica, que ninguna de las dos personas había consentido que fuera conocida por terceros, y que dicha conversación —por haber sido mantenida entre el padre de la presunta víctima y uno de sus clientes— debía gozar de un mayor grado de protección debido al secreto profesional que ampara a los juristas.

43. El Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados también ha subrayado que los expedientes y documentos de los abogados deben estar protegidos contra la incautación y la inspección, y que sus comunicaciones no deben ser interceptadas.

44. En el presente caso, se alega que el protocolo establecido por el juez para la incautación, toma de imágenes y examen de los dispositivos electrónicos del Sr. Donziger no proporcionó ninguna salvaguardia para proteger la información confidencial sobre los pueblos indígenas y campesinos a los que representaba, incluida la información relacionada con las principales estrategias de litigación para lograr la ejecución de la sentencia contra Chevron Corporation en todo el mundo. Según se informa, el protocolo proporcionaba un refugio a la empresa para tener acceso a prácticamente la totalidad de la información confidencial y las comunicaciones entre el abogado y sus clientes relacionadas con el caso, lo que hubiera permitido a Chevron Corporation conocer información que no habría podido obtener legalmente de otro modo. Incluso si pudiera justificarse la existencia de una necesidad apremiante para la entrega de la computadora y el teléfono del Sr. Donziger, el secreto profesional que ampara a los juristas debe sopesarse con respecto a esa necesidad.

45. La fuente enfatiza que el desacato penal es una medida excepcional y extraordinaria, que según ha subrayado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en repetidas ocasiones cabe aplicar con gran circunspección, dado que otorga al tribunal la potestad de definir el delito, designar un fiscal y presidir el caso, sin las salvaguardias normales previstas en cualquier otro proceso penal. El uso del desacato penal en el caso del Sr. Donziger no parece conforme a esa exhortación a la prudencia, sobre todo teniendo en cuenta el recurso del Sr. Donziger y sus manifestaciones de que cumpliría la orden del tribunal si su recurso era desestimado.

46. Se alega que la decisión de imponer medidas preventivas de privación de libertad al Sr. Donziger sobre la base de cargos de desacato es preocupante, dado que resulta de su decisión de cumplir con su deber profesional de confidencialidad. La decisión de privar al Sr. Donziger de su libertad parece más bien una medida punitiva destinada a obligarle a revelar las comunicaciones privilegiadas entre un abogado y sus clientes y un castigo por cumplir con su deber profesional.

iv. Privación de libertad más allá del período máximo previsto en los cargos

47. La fuente sostiene que las medidas preventivas de privación de libertad deben ser excepcionales y basarse en una determinación individualizada de que son razonables y necesarias, tipificada en la ley, y que no pueden utilizarse criterios imprecisos y vastos en su justificación. La carga de la prueba recae en el Estado, que debe justificar la necesidad y



proporcionalidad de privar de libertad a un encausado en espera de juicio y debe demostrar que su libertad conllevaría un riesgo sustancial de fuga o de daño a terceros o que el acusado podría interferir con los elementos probatorios o la investigación. Si la privación de libertad alcanza la duración de la condena más larga posible, el encausado debe ser puesto en libertad.

48. El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas tiene por objeto evitar que las personas permanezcan demasiado tiempo en un estado de incertidumbre sobre su destino y garantizar que la privación de libertad no dure más de lo necesario. El período que puede entenderse por razonable ha de evaluarse en función de las circunstancias de cada caso.

49. Según el artículo 9, párrafo 3, del Pacto, las medidas preventivas de privación de libertad no deben ser la regla general, solo deben utilizarse excepcionalmente y su duración ha de ser lo más breve posible. Además, su aplicación injustificada y de manera prolongada constituye una privación de libertad arbitraria.

50. Al ordenar la imposición de la medida cautelar de arresto domiciliario preventivo, el juez que presidía la causa por desacato alegó que la medida era necesaria para evitar que el Sr. Donziger saliera del país. Sin embargo, en casi un decenio, el Sr. Donziger nunca ha faltado a una citación judicial, había entregado su pasaporte, y llevaba en el tobillo un dispositivo de localización por GPS las 24 horas del día. Además, había regresado voluntariamente del extranjero para responder de los cargos penales que se le imputaban y tiene una esposa y un hijo con los que vivía en la misma residencia en los Estados Unidos desde hacía 14 años.

51. Según el juez del caso de desacato penal contra el Sr. Donziger, debido a la denegación de su derecho a un juicio con jurado, la máxima pena que podía imponérsele era de seis meses de prisión. El Sr. Donziger lleva más de dos años en arresto domiciliario preventivo.

52. La fuente afirma que el arresto domiciliario preventivo del Sr. Donziger plantea serias dudas sobre la legalidad de la privación de libertad, tanto por la aparente falta de necesidad como por la exigencia de liberar a los encausados cuando la duración de la privación de libertad supera la duración máxima de la pena potencial.

v. Privación de libertad como forma de represalia

53. La fuente recuerda que, según la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, se entiende por defensor de los derechos humanos toda persona que actúa, individualmente o en asociación con otras, para promover o proteger los derechos humanos. La Declaración protege los derechos de las personas a procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, a ofrecer y proporcionar asistencia jurídica profesional y cualificada, y a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de promover y proteger los derechos humanos.

54. La fuente también recuerda que los defensores de los derechos humanos pueden trabajar en cuestiones relacionadas con los desechos tóxicos y su impacto en el medio ambiente, y para proteger el derecho a la vida y el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr, así como los derechos de los pueblos indígenas. La fuente señala que los defensores de los derechos humanos pueden prestar asesoramiento jurídico profesional y representar a las víctimas en los procesos judiciales y que muchos de ellos trabajan para velar por que quienes violan los derechos humanos tengan que rendir cuentas de ello.

55. Se informa de que el trabajo del Sr. Donziger como defensor de los derechos humanos, representando a personas de muy diversos orígenes en casos relativos a violaciones de los derechos humanos de variada índole, se extiende a lo largo de cuatro decenios y abarca varios continentes. El Sr. Donziger visitó el Ecuador en 1993 y posteriormente formó parte de un equipo jurídico que presentó una demanda colectiva en Nueva York en nombre de 30.000 indígenas de la Amazonía ecuatoriana, en respuesta al vertido generalizado y sistemático de residuos petrolíferos en la región y a las repercusiones sanitarias que ello había ocasionado en las comunidades.

56. En 2017, la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación expresó su preocupación por una nueva e inquietante práctica que se observaba en los Estados Unidos, la cual consistía en que ciertos litigantes utilizaban la legislación relativa a la extorsión organizada para intimidar a activistas particulares y a agrupaciones de ese tipo. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos también ha expresado su preocupación por las restricciones que sufren los defensores del medio ambiente en los Estados Unidos. La fuente informa de una tendencia alarmante en ese país, en la que, desde 2019, los defensores de los derechos humanos son atacados y acosados a través del sistema de justicia penal.

57. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado su preocupación respecto de las empresas y corporaciones que presentan denuncias penales contra los defensores de los derechos humanos con el fin de atenuar su actividad. Según la Comisión, las empresas privadas no solo presentan denuncias en el marco de procesos penales infundados, sino que a veces llevan a cabo campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos para empañar su credibilidad.

58. En julio de 2020, la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo expresó su preocupación por la privación de libertad del Sr. Donziger como forma de represalia por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos. Dirigiéndose por carta a dos comités del Congreso de los Estados Unidos, la presidenta solicitó a la Cámara que estudiara el caso del Sr. Donziger.

59. Las actuaciones judiciales contra el Sr. Donziger siguen, al parecer, el mismo patrón y parecen estar destinadas a obstruir su trabajo de defensa de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos. El motivo inmediato de los cargos penales de desacato que condujeron a la privación de libertad del Sr. Donziger fue su negativa a entregar dispositivos que darían a Chevron Corporation un acceso casi total a documentos confidenciales, privilegiados y protegidos. Tal entrega habría comprometido la capacidad del Sr. Donziger para prestar asistencia jurídica a las personas que defendía y habría puesto sus vidas, supuestamente, en grave peligro.

60. La fuente recuerda que la privación de libertad de defensores de los derechos humanos por motivos únicamente vinculados a sus actividades legítimas es arbitraria. Tomar como objetivo a personas por sus actividades como defensores de los derechos humanos es discriminatorio y vulnera los derechos a la igualdad ante la ley y a la igual protección de la ley recogidos en los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 26 del Pacto.

#### *Respuesta del Gobierno*

61. El 3 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno de los Estados Unidos en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. Asimismo, le pidió que presentara, a más tardar el 6 de abril de 2021, información detallada sobre la situación actual del Sr. Donziger y aclarara las disposiciones jurídicas en virtud de las cuales seguía privado de libertad, así como la compatibilidad de esas disposiciones con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en particular, de los tratados ratificados por ese país. El Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de los Estados Unidos a que velara por la integridad física y mental del Sr. Donziger.

62. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta alguna del Gobierno, que tampoco ha solicitado una prórroga, posibilidad prevista en el párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no se haya mantenido en comunicación desde 2017, al no haber respondido a ninguna de las comunicaciones remitidas por el Grupo de Trabajo desde entonces<sup>8</sup>. El Grupo de Trabajo alienta al Gobierno a colaborar con el Grupo de Trabajo de forma constructiva.

<sup>8</sup> Véanse las opiniones núms. 70/2019, 85/2019, 49/2020 y 32/2021.

## Deliberaciones

63. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

64. A fin de determinar si la detención del Sr. Donziger es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios que ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae sobre el Gobierno en caso de que desee refutar las acusaciones<sup>9</sup>. En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

65. El Grupo de Trabajo debe considerar ante todo si el Sr. Donziger se encuentra actualmente privado de libertad. El 6 de agosto de 2019, se impuso al Sr. Donziger un arresto domiciliario preventivo, por lo que, desde esa fecha, lo que supone un período de más de dos años en el momento en que se aprobó la presente opinión, no se le ha permitido salir libremente de su apartamento. Según la fuente, el Sr. Donziger está efectivamente confinado en su apartamento, ha tenido que entregar su pasaporte y debe llevar en el tobillo un dispositivo de localización por GPS. El Grupo de Trabajo observa con pesar que el Gobierno ha escogido no responder a ninguna de esas denuncias.

66. Como el Grupo de Trabajo ha afirmado anteriormente, la privación de libertad no es solo una cuestión de definición jurídica, sino también de hecho. Si la persona interesada no tiene libertad para abandonar el lugar en que se encuentra privada de libertad, se han de respetar todas las salvaguardias apropiadas que se hayan previsto para evitar la detención arbitraria<sup>10</sup>. Además, en su jurisprudencia el Grupo de Trabajo ha sostenido que el arresto domiciliario equivale a una privación de libertad si se lleva a cabo en locales cerrados de los que la persona no está autorizada a salir<sup>11</sup>. Para determinar esa circunstancia, el Grupo de Trabajo considera si la persona está limitada en sus movimientos físicos, en la posibilidad de recibir visitas y en el uso de diversos medios de comunicación, así como el nivel de seguridad en torno al lugar en el que se supone que la persona está detenida<sup>12</sup>. Por consiguiente, la evaluación de si un arresto domiciliario constituye una privación de libertad debe realizarse caso por caso<sup>13</sup>.

67. En el presente caso, la fuente ha argumentado, y el Gobierno no ha rebatido, que el Sr. Donziger está confinado en su apartamento desde el 6 de agosto de 2019 por orden judicial; que se le ha exigido llevar un dispositivo de vigilancia electrónica y que ha tenido que entregar su pasaporte. El Grupo de Trabajo observa que el juicio contra el Sr. Donziger está en curso. En tales circunstancias, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Donziger ha estado efectivamente privado de su libertad desde el 6 de agosto de 2019.

68. Habiendo establecido que el Sr. Donziger ha sido privado de su libertad desde el 6 de agosto de 2019, el Grupo de Trabajo procederá a examinar si esa privación de libertad constituye una privación de libertad arbitraria.

### a) *Categoría I*

69. El Grupo de Trabajo desea observar en primer lugar que las informaciones que se le han transmitido se refieren a procesos diferenciados, aunque estrechamente relacionados. Uno de ellos se remonta a 2011 y se refiere a los cargos de extorsión organizada presentados

<sup>9</sup> A/HRC/19/57, párr. 68.

<sup>10</sup> Véase A/HRC/36/37, párr. 56; véase también la opinión núm. 37/2018.

<sup>11</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 13/2007, párr. 24; y núm. 37/2018; y la deliberación núm. 1 (E/CN.4/1993/24, secc. II), párr. 20.

<sup>12</sup> Véase, por ejemplo, la opinión núm. 16/2011, que trata de una persona en arresto domiciliario que no podía reunirse con diplomáticos extranjeros, periodistas u otros visitantes en su apartamento, y no tenía acceso a su teléfono móvil o a Internet. Tampoco se le permitía salir de su apartamento, excepto para desplazamientos cortos aprobados y bajo escolta policial, y la entrada al edificio estaba vigilada por agentes de seguridad (párr. 7). Véanse también las opiniones núms. 21/1992, 41/1993, 4/2001, 11/2001, 11/2005, 18/2005, 47/2006, 12/2010, 30/2012 y 39/2013.

<sup>13</sup> Deliberación núm. 1, párr. 20.

contra el Sr. Donziger. Ese proceso fue presidido por el juez K y su resolución aún se desconoce, dado que está en curso. Vinculado a ese proceso, aunque diferenciado, está la causa penal por desacato, presidida por el juez P, que dio comienzo en 2018 y que condujo a la imposición del arresto domiciliario preventivo al Sr. Donziger el 6 de agosto de 2019.

70. El Grupo de Trabajo observa que la fuente ha formulado numerosas alegaciones muy graves en relación con el primer proceso, iniciado por Chevron Corporation en 2011, incluidas las acusaciones de parcialidad del juez K (véanse los párrafos 9, 11 y 25 a 28), la negativa del juez K a permitir que los testigos declarasen y otras vulneraciones del principio de igualdad de medios procesales (véanse los párrafos 11 y 28). El Grupo de Trabajo toma nota de las graves críticas a la imparcialidad del proceso que se han comunicado (véanse los párrafos 33 y 37). Sin embargo, no fue ese proceso, sino los cargos penales por desacato los que llevaron a la privación de libertad impuesta al Sr. Donziger. Por lo tanto, el primer proceso queda fuera del mandato del Grupo de Trabajo. No obstante, teniendo en cuenta las graves alegaciones y que estas no han sido rebatidas, el Grupo de Trabajo remite el caso al Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, al Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas y al Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, para su examen ulterior y la adopción de las medidas oportunas.

71. En cuanto al último de los procesos, a saber, los cargos penales por desacato, el Grupo de Trabajo recuerda las afirmaciones de la fuente, que no han sido rebatidas, de que el 6 de agosto de 2019, el juez P ordenó que el Sr. Donziger entregara su pasaporte, llevara en el tobillo un dispositivo de localización por GPS y permaneciera en reclusión domiciliaria. El juez P justificó el arresto domiciliario preventivo alegando que el Sr. Donziger presentaba riesgo de fuga, concretamente porque había desobedecido anteriormente “órdenes judiciales” (no especificadas) y tenía antecedentes de viajes al Ecuador. La fuente ha afirmado, y el Gobierno no ha rebatido, que el Sr. Donziger trató de impugnar repetida e infructuosamente esa decisión entre septiembre de 2019 y enero de 2020. El Sr. Donziger presentó y argumentó un recurso contra las medidas preventivas de privación de libertad, que fue desestimado en un auto de una sola frase el 18 de febrero de 2020.

72. El Grupo de Trabajo recuerda la norma firmemente arraigada de derecho internacional de que las medidas preventivas de privación de libertad deben ser la excepción y no la regla, y que deben ser ordenadas por el menor tiempo posible<sup>14</sup>. El artículo 9, párrafo 3, del Pacto dispone que la imposición de medidas preventivas de privación de libertad a las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales. De ahí que la libertad se reconozca como principio, y su privación, como excepción en aras de la justicia<sup>15</sup>.

73. Para aplicar ese principio, las medidas preventivas de privación de libertad deben basarse en una determinación individualizada de que dicha medida resulta razonable y necesaria para fines tales como impedir la fuga, la alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito<sup>16</sup>. Los tribunales deberán examinar si existen alternativas a la privación de libertad, como la libertad bajo fianza, que harían innecesarias las medidas privativas de libertad<sup>17</sup>. Según la fuente, las solicitudes del Sr. Donziger para impugnar las medidas preventivas de privación de libertad fueron rechazadas por el tribunal en numerosas ocasiones, y su último recurso fue desestimado el 18 de febrero de 2020. En esa ocasión, la fuente ha argumentado, y el Gobierno no lo ha rebatido, que el tribunal dictó una resolución de una sola frase. El Grupo de Trabajo no puede aceptar que con ello se satisfagan los requisitos del artículo 9, párrafo 3, del Pacto y, por lo tanto, no puede aceptar que la

<sup>14</sup> Opiniones núms. 28/2014, párr. 43; 49/2014, párr. 23; 57/2014, párr. 26; 1/2020, párr. 53; y 8/2020, párr. 54; y la observación general núm. 35 (2014), párr. 38, Comité de Derechos Humanos, sobre la libertad y la seguridad de la propia persona, y A/HRC/19/57, sección III.A.

<sup>15</sup> A/HRC/19/57, párr. 54.

<sup>16</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 38.

<sup>17</sup> *Ibid.*; opinión núm. 83/2019, párr. 68, del Grupo de Trabajo; y A/HRC/30/37, anexo, directriz 15.

imposición de medidas preventivas de privación de libertad al Sr. Donziger se haya realizado de conformidad con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

74. Además, el Grupo de Trabajo toma nota de las graves acusaciones de parcialidad del juez K que ha denunciado la fuente (véanse los párrafos 9, 11 y 25 a 28), las cuales no han sido rebatidas por el Gobierno. A ese respecto, el Grupo de Trabajo toma nota de que fue el juez K quien seleccionó personalmente al juez P para que presidiera el proceso por los cargos de desacato que aquel había presentado contra el Sr. Donziger y que lo hizo eludiendo las normas y procedimientos establecidos (véanse los párrafos 17 y 31). Cuando el Sr. Donziger impugnó la designación del juez P, fue este mismo juez quien la examinó y la desestimó afirmando, entre otras cosas, que la parcialidad no constituía una razón válida.

75. El Grupo de Trabajo recuerda que es inherente a la buena práctica del poder judicial que este sea ejercido por una autoridad independiente, objetiva e imparcial en relación con los asuntos tratados, como afirma el Comité de Derechos Humanos en relación con el artículo 9, párrafo 3, del Pacto<sup>18</sup>. En el presente caso, el Grupo de Trabajo considera que el juez P no actuó de manera independiente, objetiva e imparcial en el proceso contra el Sr. Donziger. En consecuencia, el Grupo de Trabajo concluye que la imposición de medidas preventivas de privación de libertad al Sr. Donziger se realizó en contravención del artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

76. La fuente afirma, y el Gobierno no lo desmiente, que la pena máxima por el delito del que se acusa al Sr. Donziger es de seis meses de prisión (véase el párrafo 20). La duración del arresto domiciliario del Sr. Donziger, desde el 6 de agosto de 2019, equivale a cuatro veces la pena máxima posible por esos cargos. A ese respecto, el Grupo de Trabajo recuerda que el Comité de Derechos Humanos ha sostenido que si el período durante el cual el acusado ha estado recluso alcanza la duración de la pena más grave que podría imponerse por los delitos imputados, el acusado deberá ser puesto en libertad<sup>19</sup>, lo cual constituye otra contravención del artículo 9, párrafo 3, del Pacto.

77. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Donziger carece de base legal y, por lo tanto, es arbitraria y se inscribe en la categoría I de las categorías de detención arbitraria a las que se remite el Grupo de Trabajo al examinar los casos que se le presentan. El Grupo de Trabajo remite este caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para su examen ulterior y la adopción de las medidas oportunas.

#### b) *Categoría III*

78. La fuente ha afirmado, y el Gobierno ha optado por no refutarlo, que el Sr. Donziger ha sido objeto de la aplicación de medidas preventivas de privación de libertad desde el 6 de agosto de 2019, un período muy largo, de más de dos años de duración en el momento de la presente opinión. Dadas las circunstancias, el Grupo de Trabajo considera que al Sr. Donziger se le está negando su derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. El carácter razonable de la dilación en llevar el caso a juicio debe evaluarse a la luz de las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta la complejidad de este, la conducta del imputado y la manera en que las autoridades hayan abordado el asunto<sup>20</sup>. En el presente caso, el Grupo de Trabajo toma nota del excepcional nivel de cooperación del Sr. Donziger con todas las autoridades. Además, como se ha señalado anteriormente, la pena máxima que podría imponerse es de seis meses de prisión. Dado que el Sr. Donziger lleva más de dos años privado de libertad, el Grupo de Trabajo entiende que los tribunales deben reconsiderar qué alternativas existen a la privación de libertad<sup>21</sup>. El Grupo de Trabajo recuerda que ni siquiera las circunstancias de una emergencia de salud pública pueden justificar la denegación de los derechos a un juicio

<sup>18</sup> Comité de Derechos Humanos, *Kulomin c. Hungría* (CCPR/C/56/D/521/1992), párr. 11.3.

<sup>19</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 38. Véase también la opinión núm. 14/2019 del Grupo de Trabajo.

<sup>20</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 37; y observación general núm. 32 (2007), párr. 35.

<sup>21</sup> Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 37.

imparcial, como se explica en su deliberación núm. 11, relativa a la prevención de la privación de libertad arbitraria en el contexto de las emergencias de salud pública<sup>22</sup>.

79. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin demora injustificada es una de las garantías esenciales de un juicio imparcial consagrada en los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, párrafo 3, y 14, párrafo 3 c), del Pacto, y se ha vulnerado en el presente caso. Si el Sr. Donziger no puede ser juzgado en un plazo razonable, tiene derecho a ser puesto en libertad, según establece los artículos 9, párrafo 3, y 14, párrafo 3 c), del Pacto<sup>23</sup>. Dado que esto no ha ocurrido, se ha producido una vulneración de los derechos del Sr. Donziger en virtud de dichos artículos.

80. El Grupo de Trabajo recuerda la alegación no rebatida de que el Sr. Donziger no recibió una decisión motivada en relación con la aplicación de las medidas preventivas de privación de libertad (véase el párrafo 73). Por tanto, el Grupo de Trabajo concluye que se ha vulnerado el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

81. El Grupo de Trabajo ya ha examinado las múltiples acusaciones de parcialidad del juez K contra el Sr. Donziger (véanse los párrafos 74 y 75). El Grupo de Trabajo señala que al Sr. Donziger se le negó, de forma sesgada, el derecho a ser juzgado por un jurado y que fue el juez K quien, de hecho, redactó los cargos contra el Sr. Donziger. Los hechos constituyen una turbadora muestra de falta de objetividad e imparcialidad, por lo que el Grupo de Trabajo considera que se ha vulnerado además el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

82. Teniendo en cuenta lo anterior, y dada la excepcional duración de las medidas preventivas de privación de libertad impuestas al Sr. Donziger, que ha superado en más de cuatro veces la pena máxima posible, el Grupo de Trabajo considera que la privación de libertad del Sr. Donziger se inscribe en la categoría III. Para alcanzar esa conclusión, el Grupo de Trabajo también tiene en cuenta sus opiniones en lo que respecta a la categoría V (véase la sección C, a continuación).

*c) Categoría V*

83. El Grupo de Trabajo pasa a continuación a examinar la alegación no rebatida de que el Sr. Donziger es actualmente objeto de medidas preventivas de privación de libertad por cargos penales de desacato, dado que esos cargos se derivan de su decisión de cumplir con el deber profesional que como abogado tiene respecto de la confidencialidad de sus clientes.

84. El Grupo de Trabajo desea expresar su consternación por las alegaciones denunciadas en el presente caso, que no han sido refutadas. Los cargos contra el Sr. Donziger y la privación de libertad de la que este es objeto parecen ser una represalia por su trabajo como representante legal de las comunidades indígenas, al haberse negado a revelar el contenido de las comunicaciones confidenciales mantenidas con sus clientes en un caso de muy alto perfil contra una empresa multinacional. A ese respecto, el Grupo de Trabajo recuerda que, en virtud del principio 14 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, los abogados actuarán en todo momento con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas reconocidas que rigen su profesión. En el principio 22 de ese mismo instrumento, se prescribe que los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su relación profesional. En el presente caso, el Sr. Donziger proporcionó varias opciones sobre cómo podía cooperar con el poder judicial de los Estados Unidos sin faltar a su deber profesional de confidencialidad hacia sus clientes, y manifestó expresamente su preocupación por la necesidad de mantenerse fiel a su deber ético como abogado. Sin embargo, fue privado arbitrariamente de su libertad el 6 de agosto de 2019, como el Grupo de Trabajo ha establecido anteriormente.

85. Además, el Grupo de Trabajo es consciente de que el Sr. Donziger era el representante legal de las comunidades indígenas y que, de hecho, actuaba como defensor de los derechos

<sup>22</sup> A/HRC/45/16, anexo II, párrs. 20 y 21.

<sup>23</sup> Véase A/HRC/19/57, sección III.A. Véase también la opinión núm. 18/2018, párr. 50, del Grupo de Trabajo.

humanos, una conclusión similar a la extraída por la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en junio de 2020.

86. En el pasado, el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que la condición de defensor de los derechos humanos está protegida por el artículo 26 del Pacto<sup>24</sup>. En consecuencia, el Grupo de Trabajo concluye que el Sr. Donziger fue privado de libertad por motivos discriminatorios, en concreto por su condición de abogado y defensor de los derechos humanos, en contravención de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto. Su privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría V. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, para su examen ulterior y la adopción de las medidas oportunas.

87. El Grupo de Trabajo desea subrayar que las conclusiones de la presente opinión sobre la categoría V se limitan estrictamente a las circunstancias muy específicas del caso del Sr. Donziger.

### **Decisión**

88. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Steven Donziger es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 7, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 1, 9, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, III y V.

89. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de los Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Donziger sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

90. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Donziger inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

91. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Donziger y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la conculcación de sus derechos.

92. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, al Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, al Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, para que adopten las medidas oportunas.

93. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### **Procedimiento de seguimiento**

94. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

<sup>24</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 48/2017, 50/2017 y 19/2018; y A/HRC/36/37, párr. 49.

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Donziger sin condiciones y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Donziger;
- c) Si se ha investigado la vulneración de los derechos del Sr. Donziger y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de los Estados Unidos con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

95. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

96. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

97. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>25</sup>.

*[Aprobada el 6 de septiembre de 2021]*

---

<sup>25</sup> Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.